
PLAZA DOMINICAL

Miguel Angel Granados Chapa

Derechos humanos.

Todo anda al revés

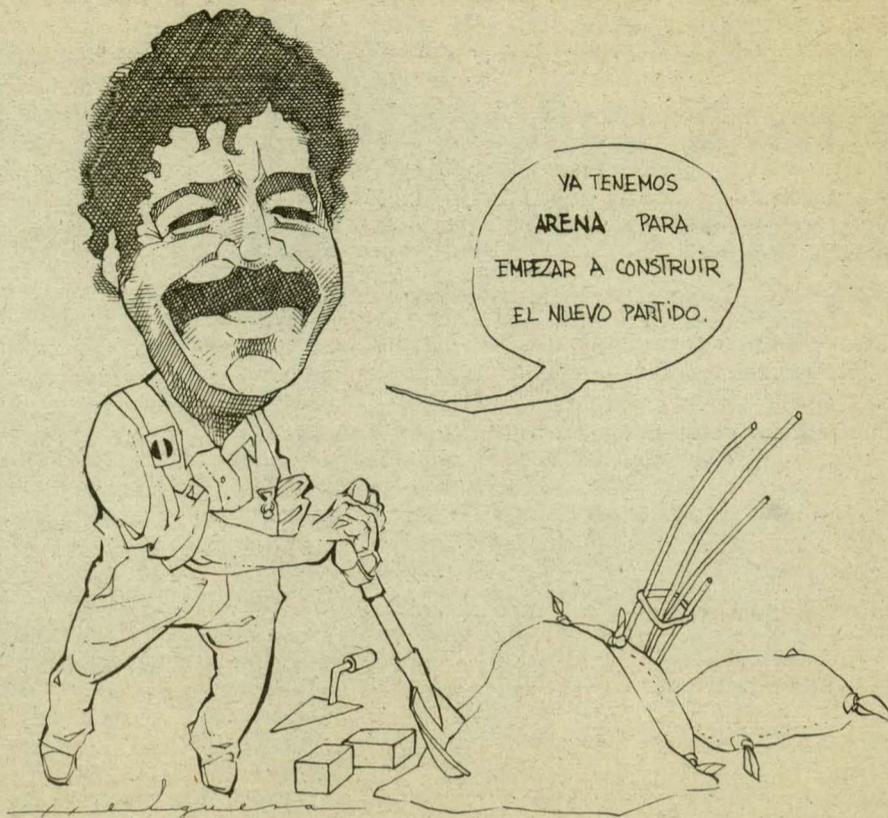
Si las cosas fueran como antes, en vez de recibir con bombo y platillos al presidente de El Salvador, el gobierno mexicano hubiera empujado en la Asamblea General de la OEA la con-

■ 4

1200 pesos

Viene de la 1

LOS AMIGOS DE CRISTIANI ■ Helguera



izquierda y se debe atemperar su antigua influencia en el PRI. Si la Fundación Konrad Adenauer convidó al senador sonorense y éste aceptó la invitación, no parecerá ya tan descabellada la especie de una conversión priísta hacia las tesis del socialcristianismo. La Adenauer, en efecto, es la fundación de la democracia cristiana alemana, y habitualmente su relación era con el PAN, pero el vuelco de los tiempos estaría haciéndolo acercarse al partido oficial mexicano. De raíz jacobina, al PRI le vendría una doctrina no laica como un par de pistolas a un Santo Cristo. Pero quizá no sería lo mismo respecto al nuevo partido que según algunos calculan fundará el salinismo para perpetuarse. El Partido de la Solidaridad, que acaso surgiera de la decimocuarta —y en consecuencia última— asamblea nacional priísta, se acogería a la doctrina social católica para endulzar el neoliberalismo que realmente profesan sus impulsores. Solidaridad, como todo el mundo lo sabe, es el nombre del sindicato obrero, quizá financiado por el Vaticano —véase, a tal propósito, el libro de Cornwell, *Como un ladrón en la noche*— que propició la caída del régimen comunista en Polonia. Solidarismo, como todo el mundo sabe también, fue doctrina panista y su principal difusor, don Efraín González Morfín, al retirarse de Acción Nacional se llevó consigo esa doctrina y durante algún tiempo publicó un boletín con tal denominación. Solidaridad, en fin, es el nombre del principal programa social del gobierno que se inició hace 18 meses, y su emblema se reproduce por doquier, con los colores patrios, como los usados por el PRI, en una operación de sicología publicitaria fácilmente advertible, para establecer los nexos entre una y otra simbologías. Se dirá, con razón, que las palabras no se patentan, y que sería absurdo negarse a utilizar una rica en contenidos que apelan a la conciencia humana de fraternidad. Pero eso no quita que, teniendo sobre sí el partido oficial la pesada hipoteca de un pasado cada vez menos enorgullecedor, y por ello la necesidad de quitarse el maquillaje, lavarse la cara y mostrar un nuevo perfil, se recurra a fibras íntimas de los ciudadanos para cobrar una nueva credibilidad. Si todo esto es verdad, no de-

berá extrañar que al llegar a España, tercer país incluido en su gira europea, Colosio no sólo se entrevistó con los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español —que aun rosado está más a la izquierda que el PRI—, sino con la Unión del Centro Democrático, el partido de Adolfo Suárez con el que tiene también tantas convergencias, y aun con el Partido Popular, el de la derecha a que pertenece Manuel Fraga, el ministro franquista de información y turismo.

Eso, en la diplomacia de los partidos. En la narcodiplomacia, un nuevo abuso norteamericano, a pretexto del combate al tráfico de drogas, parece practicarse con daño a la soberanía mexicana, esa noción que ya casi ruboriza invocar, ante los embates del realismo que nos aconseja rendirnos ante toda fuerza avasalladora, por atropellante que sea (o por ello mismo). Se trata de un grupo de militares norteamericanos que realizan funciones de inteligencia (acopio de información) para ser usados en la guerra contra los estupefacientes. Esa unidad estaría actuando, sin conocimiento del gobierno mexicano —aunque la versión de Roberto Rock, enviado de *El Universal* dice exactamente lo contrario, es decir, que el operativo se realiza “con permiso del gobierno de México”—, en la embajada de Paseo de la Reforma y Tigris. Con extrañeza ante esta información de *Los Angeles Times*, la Secretaría de Relaciones Exteriores demandó del Departamento de Estado una explicación. Como ya se sabe que la cancillería estadounidense es más bien morosa cuando se trata de enfrentar cuestiones como esta, que afean las relaciones entre los dos países, otras instancias a las que no corresponde hacerlo, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría de la República, se han apresurado a desmentir la especie. En cambio, Washington no ha dicho oxe ni moxe, a pesar de que hasta un malentendido en este punto —en caso de que de eso se tratara— ensombrecería la visita que a partir de esta noche realizará a Estados Unidos el presidente Salinas.

La información publicada en los dos diarios, el de Los Angeles y el de aquí, coincide en pormenores, y Rock dice que pudo confirmarla “oficialmente”. Se trata de un Grupo de Análisis Tá-

tico, que actúa desde marzo y ha intervenido en por lo menos nueve operaciones, que se tradujeron en la captura de casi diez toneladas de cocaína y la retención de siete aviones. Para quienes con comparaciones como esta sientan lesionado su orgullo nacional, complétese la información diciendo que grupos militares análogos han sido establecidos por Washington en Bolivia, Colombia y Perú.

Frente al nuevo encuentro de los mandatarios mexicano y norteamericano, con oportunidad periodística *The New York Times* publicó el miércoles pasado un resumen sobre las acusaciones que achacan a políticos y funcionarios haber dispuesto de dinero público en la campaña electoral de Baja California, que se realizaba con toda intensidad hace precisamente un año. A esa información faltó el capítulo que puede ser el final del episodio y acaso también el final de la consecuencia principal y más temida por el gobierno federal y su partido, las victorias opositoras en elecciones estatales: salieron libres, amparados por la justicia federal contra el auto de formal prisión, los directores de egresos de los gobiernos de Xicoténcatl Leyva y Oscar Baylón, Remigio León Aguirre y Jorge Argote Villa. La decisión judicial tiene una importancia enorme, frente al hecho de que el gobierno estatal los acusa de peculado por veinticinco mil millones de pesos, parte de los cuales al menos fueron utilizados para gastos del PRI y sus candidatos.

Puesto que está en juego la posibilidad de que sea desmontado el mecanismo por el cual los recursos públicos contribuyen a hacer invencible al partido del gobierno, no se puede pasar por alto la liberación de esos funcionarios. Pueden haber recibido ese beneficio por buenas o por malas razones. Las buenas serían: su inocencia, que pudieron puntualmente probar o que no alcanzó a ser nublada por las eviencias de la acusación; o el eficaz funcionamiento de la justicia federal, que no obstante la relevancia política del asunto, actuó simplemente ateniéndose a las formalidades del procedimiento. Las malas pueden ser innumerables: desde el vulgar cohecho hasta una decisión política convenida para no ir más al fondo de una cuestión que excede con mucho los límites del llano derecho penal, pasando por la ineptitud de los encargados de presentar la acusación, o del juez que dictó la formal prisión, o una deliberada ineficacia de unos y otro para que quedara endeble la situación jurídica y por lo tanto pudiera fácilmente ser revertida por la defensa.

Es obvio que el extremo que más gravemente afectaría a la sociedad sería un arreglo de cúpulas partidistas, o de gobierno federal a gobierno estatal, que impidiera la punición del aprovechamiento ilícito de bienes públicos, en aras de una convivencia pacífica o, peor aún, en pos de nuevas y mejores posiciones para el PAN. Si se trata de un mero pericance judicial, susceptible de enmienda, pronto lo sabremos. Si, como ocurre con los funcionarios de Banpesca a quienes ahora se procura imputar responsabilidades, pero han quedado ya sustraídos al alcance de la justicia, quizá no lo sabremos pronto, pero sí estaremos a merced de los nocivos efectos de un pacto que consagrara la corrupción, aunque el acuerdo se fundara en pretendidas buenas intenciones, como la de no ensuciar un proceso de transición cuyos efectos de fondo tardarán en ser alcanzados.